

PERIODICO OFICIAL

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

HEMEROTECA NACIONAL
MEXICO

TOMO I.

Pachuca.—Sábado 2 de Octubre de 1869.

NUM 69.

CIRCULAR.

El ciudadano gobernador ha acordado que las leyes, decretos y demás disposiciones de las autoridades de la Federación y del Estado, sean obligatorias por el hecho de publicarse en el Periódico Oficial del gobierno del Estado.

Independencia y libertad. Pachuca, Marzo 2 de 1869.—Res. Ciudadano gobernador político del Distrito de.....

CONDICIONES.

Este periódico se publica los viernes, y sábados la tarde del día.

El precio de suscripción para el Estado, será el de cincuenta pesos cada mes, y suerte de él sesenta y dos y medio, fáncio de peso.

La administración del periódico está a cargo del C. Marcelino García, quien firmará los recibos de suscripción y despachará los pagos relativos al periódico.

Se recibirán suscripciones en esta capital, en el despacho de imprenta, y en los distritos en las administraciones de rentas.

Se harán gratis las citaciones de las oficinas del Estado, como los comités de interés general. Los de interés particular a precios convenionales.

EDITORIAL

EL PRESUPUESTO DEL ESTADO.

Hemos creido innecesario escribir otro artículo, como nos proponíamos, sobre esa materia, toda vez que acabó de discutirse en la H. legislatura el que hemos venido combatiendo, por parecernos qué no era conforme con las reglas de un buen sistema administrativo, y que el gobierno a quien pasó aquél proyecto de ley, le ha hecho observaciones. En lugar, pues, de las mías, damos preferencia a dichas observaciones, por ser de actualidad y de grandes interés para el Estado.

En la parte expositiva de la iniciativa, mandada al congreso el día 8 de Julio, indicó el gobierno con bastante claridad su propósito de sujetarse a las leyes preexistentes, incluyendo el reanuncio del Estado de México, aprobado en 1868. Si en algo se separó de ese propósito, fue en aquello en que la división del Estado de México ha hecho imposible la observancia de algunos preceptos ó en que ella demandaba nuevos gastos. Siendo ésta la base de que ha apartado el gobierno, se deja entender que en la medida hay de arbitrario, y no se extrañará que exista en su iniciativa sin variaciones. No obstante, sin embargo, que dà mayor importancia a las partidas, de las cuales pasa a oponerse. Fundándose en la experiencia que suministraron el congreso general como el del antiguo Estado de México, sostendrá que son innecesa-

rios el taquigrafo y el redactor de actas á la vez, y que por tanto resultaría una economía inteligente si se suprimiese á uno de estos empleados cuya existencia no dimana de ley, aun cuando a dato mejor la plaza del que quede.

No es posible desconocer la importancia de las funciones que desempeña el secretario particular, como lo ha reconocido la comisión especial. Tampoco se debe desconocer que las funciones del gobernador demandan una correspondencia activa con personas de elevada jerarquía, por cuyo motivo son insuficientes los seis pesos mensuales que se señalan para gastos de secretario, e insistir por tanto el gobierno en que se apruebe su iniciativa, concediendo 1,000 pesos para el secretario y gastos de secretario.

El secretario de gobierno es la persona que tiene mayor trabajo material, mayor responsabilidad, y cuyas funciones son tan variadas, que se la debe considerar, y tal vez así la consideran, como la primera en la administración. El Ejecutivo no se detendrá á demostrar la injusticia que se cometía reduciendo á este funcionario a una dotación igual á la de otros que, cualquiera que sea su jerarquía, no necesitan consagrarse su atención á tan variados objetos. Para el Ejecutivo es capital este punto, y no puede menos de exigir muy sencillamente al congreso para que señale al secretario de gobierno la dotación de tres mil pesos, con la cual no quedan sin embargo bien renumerados sus servicios.

Doblando ocuparse el congreso dentro de poco tiempo de la constitución del Estado, dispondrá entonces la conveniencia de que subasten ó se supriman las gestururas políticas. Esta consideración sería bastante para omitir por ahora toda reflexión relativa á este punto; pero como puede sufrir algo el servicio público por no estar bien dotados unos empleados, cuyas funciones son muy importantes para la felicidad y adelanto de los pueblos, cuando poseen la inteligencia, actividad y demás cualidades necesarias, ha resuelto el gobierno llamar la atención del congreso sobre las dotaciones que se asignan á los gobernos políticos, especialmente hacia la que se señala al del Distrito de Tulancingo, que en su opinión no debe bajar de 1,800 pesos. Esta gestura es sin duda alguna la que tiene sobre sí mayor abundancia de negocios, exceptuando la de Pachuca, como lo demuestra el número de los numerosos que dicta y mensualmente remite al gobierno para su conocimiento.

La dotación de 480 pesos para el secretario de la gestura de esta ciudad, es indudablemente mezquina, y para convencerse de ello, bastarán las dos razones siguientes: Es la primera, que erigidas las gestururas en tribunal para distintos juicios que con frecuencia les encomiendan nuestras leyes, el secretario se convierte en escribano, cuyas funciones son delicadísimas y demandan una inteligencia y práctica no vulgares, relativas á la trasmisión y fórmula de los juicios. Es la segunda, que según se puede inferir leyendo las distintas partidas del presupuesto, las dos comisiones se propusieron re-

menorar á todos los escribientes de los oficinas de la capital con la cantidad de 480 pesos, y siendo superiores las funciones del secretario de una gestura que las de cualquier escribiente, no habría equidad señalándoles una compensación igual.

Tampoco la habría señalando menor retribución al escribiente de la gestura que á los de otras oficinas, cuando realmente aquél trabaja más que éstos. Si, pues, no se deja la partida en los términos que la propuso el Ejecutivo, y que usó el congreso del Estado de México, sin duda con el objeto de dar libertad á los gobernadores y sus secretarios de acordar las reenumeraciones que creyeren justas, entonces al próximo congreso de Hidalgo, para ser equitativo, deberá aumentar estas dotaciones.

Igual observación se debe hacer relativamente á los demás secretarios de las gesturas, atendiendo sobre todo á que estos son á la vez escribientes.

Insiste el gobierno en que se señale la cantidad de mil pesos para comenzar la formación de una biblioteca anexa al Instituto Literario. El que se haya concedido una cantidad para la biblioteca del congreso y otra para la del gobierno, no puede ser argumento en contra de esta, porque aquéllas se llenarán con obras de legislación, de economía política y otras adecuadas á su objeto, mientras que ésta debe contener todas las conocimientos útiles en las ciencias y las artes, todas las obras de consulta, no solo para el estudiante sino para el abogado, para el ingeniero, para el comerciante, para el artesano. Quieren difundir la ilustración y tal es nuestro deber; pues bien, uno de los medios que hay para conseguirlo, consiste en la reunión de las obras en las cuales se puedan adquirir esos conocimientos. En consecuencia, el Ejecutivo pide de nuevo mil pesos para la formación de una biblioteca.

En un Estado constituido desde época más o menos remota, se comprende que hayan sido cometidas al estudio de sus legisladores todas las mejoras materiales, todas las obras de utilidad pública y que en su presupuesto solo se consideren las decretadas, porque obra en su favor la presunción de ser las únicas necesarias ó las únicas posibles; pero no se puede esperar lo mismo de un Estado cuya existencia ha comenzado ayer. En este, muy al contrario de los demás, nada se ha decretado: los caminos, los canales, los telégrafos, así como los monumentos conmemorativos ó los destinados para el cultivo de las ciencias ó para la rotonda de los grandes cuerpos del Estado, todo espera la acción de la autoridad, todo recibe de ella animación y vida.

Por qué pidieron los pueblos que forman el Estado de Hidalgo la segregación del antiguo Estado de México? Entre otras razones, porque aquellas autoridades superiores nada invertían en provecho de ellos. Esto demuestra que no se han decretado ninguna mejoras materiales, y que por tanto, para las mejoras decretadas, se ampliará hasta la exageración la cantidad de 20,000 pesos que se les destina.

Las mejoras por decretar no deben ser consideradas en el presupuesto. El congreso mismo resultó ya, al disentir el primer dictamen en lo general, que los futuros contingentes no son materia del presupuesto. Si se propone después de la publicación del presupuesto algunas obras de utilidad pública, el congreso, al aprobar su importancia, considerará también si hay bastantes recursos para hacerla ó los medios de proporcionar los que sean necesarios. Tal obra pudiera durar más, que absorba por sí sola tres, cuatro ó más veces la cantidad que se señala para mejoras materiales.

¿Por qué pidió entonces el Ejecutivo una cantidad superior á la que hoy se consulta para mejoras materiales? Porque sabe muy bien que la acción de los cuerpos legislativos es lenta, sobre todo cuando se trata de obras que consumen fuertes cantidades, y de obras que, quedando en provecho directo de alguna localidad, despiertan los celos de las localidades vecinas, las que prohíben siempre impedir que aquéllas se desarrollen. Si pidió, porque el gobierno sabe que los recessos de los congresos anulan ser bastante largos, y durante ellos se pierden oportunidades brillantes para el adelanto de las obras, como sucede entre nosotros en la estación de veras, única para emprender obras de albañilería y de composición de caminos, que por la naturaleza relativa de los materiales. Pidió esa cantidad, por último, porque creyó merecer ese voto de confianza, que en ningún caso se refería al manejo del dinero, supuesto que este se dará por las oficinas correspondientes y se justificará su inversión, sino á la calificación de la necesidad ó conveniencia de las obras que se emprendan. Si no merece el gobierno la confianza del congreso, á pesar del voto con que acaban de honrarlo los pueblos en su reciente elección, reduzcase entonces la partida á los gastos decretados, especificándolos, y suprimase el sobrante que resulte.

Acerca de sueldos accidentales, ocurre la reflexión de ser redundante la palabra accidentales y la explicación que contiene el art. 4.º de que las gratificaciones que se reúnerden no podrán tener el carácter de permanentes.

Tal es que nada se destine para celebrar las festividades patrióticas. El recuerdo de los grandes hombres y de sus grandes hechos debe renovarse al pueblo día a día, siquiera para inspirar el orgullo nacional, si no se nombra á imitar á sus progenitores. Para conseguir este objeto son insuficiencias las obligaciones voluntarias, por la apatía que han producido nuestras revueltas políticas, y en todo caso lo que se gasta en esas fiestas de su pueblo, sale del bolsillo del mismo pueblo.

Pasando al capítulo del poder judicial, insiste desde luego el ejecutivo en que se asigne mayor dotación al presidente del tribunal que á los magistrados. La respetabilidad de que debemos rodear al encargado de tan elevadas funciones, y al llamado por la Constitución para suplir las faltas del gobernador, aconseja do-

PERIODICO OFICIAL

tar a estos funcionarios con más amplitud que a los demás de su ramo. La federación ha decretado mayor remuneración para el presidente del tribunal supremo que para los magistrados, y otro tanto hizo el Estado de México. La prudencia enseña que sigamos esa costumbre.

El gobierno hizo presente en su iniciativa que solo incluía en el presupuesto la cantidad de treinta mil pesos destinada a los gastos de recaudación de las alcabalas, porque era la que traejaba el presupuesto del Estado de México en su parte relativa, y para que sirviese de instrucción al congreso si más tarde se decidía a sustituir a quel impuesto con otro; pero habiendo visto que la segunda comisión ha hecho modificaciones en la planta y dotaciones de las oficinas respectivas, hasta el grado de subir la cantidad a treinta y ocho mil quinientos cuarenta y dos pesos, se ve obligado el gobierno a llamar la atención del congreso sobre la repugnante desigualdad que hay en las dotaciones asignadas a los administradores, para hacer resaltar la cual solo citará algun ejemplo, pidiendo que se revise la planta de empleados y sueldos para las administraciones de rentas del Estado.

Mientras se asignan 400 pesos de sueldo al administrador de rentas de Apam, á los de Atotonilco y Atotonilco, se les señalan 600, y al de Jacala se dota con 365, no siendo comparables la pequeña diferencia que hay en el sueldo, con la muy considerable que hay en los productos. Mientras que á esta y á aquellas se conceden escribientes, se le niega uno á la de Apam, á la cual solo se le pasa un guarda, mientras que la de Jacala tiene dos, Atotonilco dos y Atotonilco tres. A la administración de Apam se le dan 24 pesos para gastos de escritorio, y á la de Jacala se le señalan 36.

Al administrador de rentas de Huejutla se dota también con 400 pesos, lo mismo que al de Metztitlán, á pesar de que este distrito produce menos que aquél; y al de Zumpango, también inferior en productos al primero, se le señalan 450 pesos. A los dos primeros se les pasa un escribiente dotado con 144 pesos y el último se le pasan 200 pesos para esa plaza. También se dotan con 200 pesos á cada uno de los dos guardias de esa administración, en tanto que se señalan 120 pesos para cada uno de los dos guardias de la de Huejutla y 144 para uno de la administración de Metztitlán.

Estas y otras designaciones injustas que hay en este capítulo, me autorizan á pedir que se revise y reforme la partida consultada por la segunda comisión y que se declare con lugar á votar.

Tales son las principales observaciones que he creido se deben hacer, y que se pide al congreso que tome de nuevo en consideración, sin desistir por ello de ninguna de las partidas que forman la iniciativa.

PARTE OFICIAL

GEFATURA POLITICA DEL DISTRITO DE JACALA DE LEDESMA.*

La tranquilidad pública se conserva en toda la comprensión de este Distrito, inalterable hasta la fecha.

Lo que tengo el honor de poner en el superior conocimiento de vd. para que lleve al del C. gobernador:

Independencia y Libertad. Jacala de Ledesma, Setiembre 18 de 1869.—Pedro N. Arriaga.—C. secretario general del go-

bierno del Estado de Hidalgo.—Pachuca.
Es copia.—Al. Escobar, oficial segundo.

GEFATURA POLITICA DE APAM.

Revista comprensiva de los acontecimientos notables, mejoras materiales concluidas y emprendidas, adelantos de la instrucción primaria, número de escuelas y alumnos que concurren, estado de salubridad, movimiento de la población, estado de la industria, agricultura y comercio de los pueblos, y estado que guarda la seguridad pública, todo correspondiente á la primera quincena del presente mes de Agosto.

ACONTECIMIENTOS NOTABLES.

El dia 14 del actual cayó una lluvia que aunque no fué muy fuerte, hizo algún perjuicio en algunos sombrados.

MEJORAS MATERIALES.

Están en el mismo estado que aparecen en la revista anterior.

INSTRUCCION PUBLICA.

Sigue habiendo adelantos en todos los establecimientos.

ESCUELAS Y ALUMNOS QUE CONCURREN.

Existen las mismas que constan en la revista anterior y concurren á ellas el mismo número de niños y niñas, con excepción de Zotoluca que no hay preceptor por haberse separado el que estaba, pero ya el dueño tiene encargada persona que desempeñe este encargo.

SALUBRIDAD PUBLICA.

Hasta la fecha se halla en el mejor orden.

MOVIMIENTO DE LA POBLACION.

No pude saberse aún por no tener á la vista el padrón que se tiene pedido al juez del distrito civil.

ESTADO DE LA INDUSTRIA, AGRICULTURA Y COMERCIO.

Con excepción de la agricultura que se halla regular, los otros ramos están en un estado desplorable á causa de la escasez de recursos.

ESTADO DE SEGURIDAD PUBLICA.

Se halla igualmente en este distrito.

Apam, Agosto 16 de 1869.—Antonio F. Farfan.—J. M. Picazo y Cuevas, secretario.

DOCUMENTO PARLAMENTARIO.

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO.

PROYECTO DE LEY PENAL

Para los delitos de homicidio, heridas, robo y hurto, y de procedimientos para todas las causas criminales, presentado por el tribunal superior de justicia del Estado.

(CONTINUA)

Art. 35. Se tienen como homicidas los que a sabiendas hacen abortar á una mujer embarazada por medio de bebidas, golpes ó cualquier otro medio propio para producir este efecto, y se les impondrá la pena hasta de diez años de presidio.

Si el aborto se verifica con avenencia de la mujer, ó ésta lo procura, sufrirá ella la pena de tres á diez años de prisión ó servicio de cárcel ó hospital.

Art. 36. Para la graduación de las penas por el homicidio, se considerarán como circunstancias agravantes, además de las expresadas en el art. 15, las siguientes:

I. Ser el occiso cónyuge, ascendiente, descendiente, hermano, enemigo, yerno ó enyudo del reo, ó su amo ó criado, tutor ó tutoreando, maestro ó discípulo, ó depositario de autoridad pública, ó ministro de algún culto, ó mujer, ó niño ó anciano.

II. Manifestar crueldad por el hecho de aumentar deliberadamente los padecimientos del asesinado, ó hiriéndolo después de rendido ó muerto, ó insultando su cadáver.

III. Ejecutar el hecho sobre seguro, teniéndose por tal el agravio fuera de riña ó pelea. En el caso de que se cometiere en riña, y esté fuere mediata con alegría, el homicidio será juzgado con arreglo al art. 29.

IV. Verificarse en lugar sagrado ó en procesión, escusa ó desprecio de algún depositario de la autoridad, ó en lugar donde ésta se ejerce.

V. Verificarse en la casa del agredido, sin preoceder grava provocación de su parte.

VI. Añadir la ignominia á los efectos naturales del hecho.

VII. Ejecutarse en tiempo de alguna calamidad pública ó desgracia particular del agredido.

VIII. Ser hecho en despoblado ó de noche, ó con armas cortas ó de fuego.

IX. Haber el reo cometido otro delito igual ó mayor.

Art. 37. Se tendrán como circunstancias atenuantes:

I. Las expresadas en el art. 6º, cuando no concuerren todos los requisitos que se exigen para eximir al reo de toda responsabilidad criminal.

II. Ser el delinquente menor de diez y siete años y medio.

III. Haber tenido intención de causar no mal menor que el que realmente ejecutó.

IV. Grava provocación ó otros estímulos tan poderosos, que naturalmente hayan producido arrabio ó obcección.

V. La presentación voluntaria del reo.

Art. 38. Si dos ó más personas se concertaren para alcanzar á alguno y lo quitaren la vida, todas serán castigadas con la pena de muerte, aunque no todas se hubiesen herido.

Art. 39. Faltando dicho concierto, y sucediendo el homicidio en riña ó pelea, se observarán las reglas siguientes:

I. Si consta quiénes son los heridores, y cuáles heridas causaron, serán castigados conforme á la calidad de estas, á no ser que juntas y ninguna por sí sola, hubiesen causado la muerte, pues en tal caso todos los heridores sufrián la pena de homicidio.

II. Si se ignora quien haya dado la herida mortal, todos los heridores serán castigados con pena extraordinaria, y lo mismo sucederá cuando se ignore quienes hayan sido heridores, y quienes no.

Art. 40. El que quisiera calificar sin conocimiento de la autoridad, es sospechoso de homicidio. (Art. 16 de la ley de 31 de Julio de 1859.)

Art. 41. Siempre que alguna persona cause á otra contusiones, quemaduras ó cualquier otro género de heridas, haya ó no conocimiento de continuidad, será castigado conforme á las prescripciones de este decreto, y teniéndose en consideración:

I. La calificación judicial que se haga de las lesiones ó heridas.

II. El resultado de éstas.

Art. 42. En los casos de heridas se tendrán como esculpentes ó atenuantes las circunstancias

que en su caso lo son respecto del homicidio, y como agravantes, además de las expresadas hasta aquí, las siguientes, siempre que sea producidas por el delito:

Locura, ebrietad ó imbecilidad en el ofendido.

Inutilidad para el trabajo.

Impotencia.

Esterilidad.

Pérdida ó impedimento de algún miembro.

Deformidad notable.

Ciegar ó si hall indeleble en la cara.

Esfuerzo incurable.

Art. 43. Las heridas, lores y todas aquella cuya santidad se obtenga dentro de quince días serán castigadas con pena de ocho días á seis meses de prisión ó obras públicas, ó con multa de diez ó doscientos pesos.

Art. 44. Si la santidad no se obtuviere dentro de los quince días, se castigará al heridor con prisión, obras públicas ó presidio, según lagraduación siguiente:

I. Por heridas graves por accidentes, de seis meses á dos años.

II. Por heridas graves por esencia, de uno á tres años.

III. Por heridas mortales por accidente, de uno y medio á seis años.

Art. 45. El que denostare ó desacreditare otorgado por haber rehusado un desafío con armas, si lo hace con publicidad, sufrirá la pena de un año de prisión ó ocho meses de obras públicas; careciendo de esa circunstancia, será castigado con la mitad de la pena expresada.

CAPITULO IV.

DE LOS ROBOS.

Art. 46. El culpable de robo con violencia en las personas, será castigado con la pena de muerte, en los casos siguientes:

I. Cuando con motivo ó ocasión del robo resultare homicidio.

II. Cuando se cometiere en despoblado y con motivo ó ocasión de él se diera tormento á los robados, hubiere violación, ó resultare mutilación ó heridas graves.

Art. 47. La misma pena de muerte se aplicará en todo caso al cabecilla ó jefe de los saltadores, aun cuando en el asalto no concuerde ninguna de las circunstancias de que habla el artículo anterior.

Art. 48. A los saltadores que no tengan el carácter de cabecillas, y en quienes no concuerde alguna de las circunstancias necesarias para aplicarles la pena de muerte, se les impondrá la de diez años de presidio.

Art. 49. Con la misma pena de muerte se aplicará en todo caso al cabecilla ó jefe de los saltadores, aun cuando en el asalto no concuerde ninguna de las circunstancias de que habla el artículo anterior.

Art. 50. Cuando se cometido el robo cometido en poblado, en el que concurren algunas de las circunstancias siguientes:

I. Tormento, violación, mutilación ó heridas graves.

II. Que sea cometido en cuadrilla, esto es, concursando más de dos malhechores.

III. Que el reo haya cometido este delito otras dos ocasiones con violencia en las personas, cualesquier que hayan sido las demás circunstancias.

Art. 51. Los malhechores presentes á la ejecución de un robo en cuadrilla, serán además considerados para los efectos de esta ley, como autores de todos y cada uno de los atentados cometidos en el acto, si no constare que hicieron lo posible por impedirlos.

Art. 52. Se tendrá como presente al robo y á los atentados cometidos por una quadrilla, el malhechor quo andá habitualmente en ella, salvo la prueba en contrario.

Art. 53. La tentativa de robo, acompañada de cualesquiera de los otros delitos ó circunstancias expresadas en los artículos 46, 47, 48 y 49, se castigará como robo consumado, con esa cantidad agravante; exceptuándose el caso de que los malhechores hayan desistido espontáneamente del propósito erimioso, en cuyo caso se elevará lo provenido en el art. 13.

Art. 54. El reo de robo con violencia en las casas y no comprendido en el art. 49, será castigado con la pena de uno á cuatro años de prisión ó obras públicas, si concurre alguna de las circunstancias siguientes:

I. Que el ladrón fuero armado.

II. Que se cometiere en lugar público ó habilitado.

III. Que se verifique por medio de escondimiento, rompimiento de pared ó techo, fractura de puertas ó ventanas, ó de armarios, arcos ó otros muebles cerrados ó sellados.

IV. Que se empleen llaves falsas, ganchos u otros instrumentos semejantes.

V. Que se entre en el lugar del robo á favor de nombres supuestos, ó simulando autoridad.

Art. 55. Si los malhechores no portaren armas, y en el robo no se verificare ninguna de las otras circunstancias especificadas en el artículo anterior, la pena será la mitad de la designada en el mismo artículo.

Art. 56. Si los efectos robados pertenesieren á la gente ó al gobierno, ó á alguna obra piadosa ó de beneficencia pública, y el robo se perpetrare mediante alguna de las cualidades de que habla el art. 54, se duplicará la pena señalada en el propio artículo.

Art. 57. En cuanto á los robos cometidos en asentamiento ó por saltaderos, esta ley comienza a regir cuando sea vigor la del gobierno general, vigente ahora.

CAPITULO V. DE LOS HURTOS.

Art. 58. Son reos de hurtos:

I. Los que con ánimo de lucrar para él ó para otros y sin violencia ni intimidación á las personas, ni fuerza en las cosas, toman ó sustraen su libremente de las cosas, muebles ó inmuebles sin la voluntad de su dueño.

II. Los que con ánimo de lucrar negaren mañosamente haber recibido dinero ó otra cosa, que no son de su dueño, ó somovientes quo se les hubiere entrado en préstamo, depósito ó por otro título en obligación á la devolución ó restitución.

Art. 59. La pena del hurtio será de ocho días de prisión á seis años de obras públicas ó presidio, conforme á las reglas siguientes:

I. Para computar la pena quo entre estos dos extremos deba imponerse al reo, someterán en consideración los jueces su mayor ó menor miseria, de la persona robada, la mayor ó menor facilidad quo tenga el ladrón de adquirir honradamente con que subsistir, atendida su edad, sexo, salud, familia etc; la mayor ó menor abundancia de recursos en el lugar y tiempo del delito; la mayor ó menor frecuencia con que éste se cometa en el mismo tiempo y lugar, y el mayor ó menor valor real ó estimativo de la cosa robada, ó la falta quo á su dueño le haga.

II. Los hurtos raferos y todos los simples, y valor no excede de cincuenta pesos, se castigarán con pena quo no excede de seis meses ó multa de diez á cincuenta pesos.

III. Si lo hurtado vale de cincuenta á cien pesos, la pena podrá llegar á ocho meses.

IV. Si vale de cien pesos ó más cincuenta cincuenta, la pena podrá llegar á un año.

V. Si importa de doscientos cincuenta á mil pesos, la pena podrá llegar á dos años.

VI. Si pasa de mil pesos, la pena podrá llegar á tres años.

VII. Si el hurtio se verifica de noche, se impondrá al reo por esta sola circunstancia la mitad mas de la pena quo merezca por el delito simple.

VIII. Si el hurtio se hiciera en los momentos de alguna inundación, incendio, tumulto ó cualquier calamidad semejante, ó aprovechándose el ladrón de osas desgracias, se impondrá otro tanto mas de la pena correspondiente al hurtio simple.

IX. De la misma manera se agravará la pena del cometido en mercado ó reunión pública, ó dentro del recinto de teatro ó templo, en los momentos de concurrencia, ó en alguno edificio ó oficina pública.

X. Con igual número se castigará el hurtio de objetos quo se encuentren en los templos ó sus oficinas, destinados á algún culto, de los que sean de propiedad pública, y de los que siéndolo ó no, son de uso público.

XI. Si fuere con abuso de confianza.

XII. Si el hurtio fuere de vestidos ó de objetos quo se quiten á un cadáver, se impondrá hasta la mitad mas de la pena correspondiente al delito simple: se impondrá el doble de la misma pena si pure cometer el hurtio se exhibió el cadáver.

XIII. Si el hurtio fuere de una ó más cabezas de ganado, se impondrá pena doble.

XIV. Se castigará respectivamente conforme á las fracciones anteriores, al depositario y al comodatario quo nieguen maliciosamente el depósito ó préstamo, y fuesen convencidos de él en juicio.

XV. Si á la vez se juzgará al reo por varios hurtos ó fuere reincidente.

Art. 60. En todo hurtio ó robo, se aplicará siempre por base la pena quo corresponda al delito simple, y sobre ella se impondrá, segun los casos, el doble ó el aumento respectivo de que hablan las reglas anteriores. El recargo de pena quo estas establecen es sin perjuicio de la que corresponda por la falsedad, exhumación ó cualquier otro delito diverso que, concurrediendo con el hurtio ó robo, constituya circunstancia quo como tal larga pena señalada.

Art. 61. Cuando al hurtio ó robo acompañe ó sirva de medio para cometerlo, ó resultare de él otro delito, se considerará esta circunstancia como agravante y se aplicarán al reo ambas penas, si fueren compatibles; y no siéndolo, se le condenará á sufrir la mayor.

Art. 62. El quo á subienda se apropiare ó destruyere los títulos de la propiedad negara para ensuciarlo ó usar de ella, ó con el objeto de perjudicar de cualquier modo á su dueño, sufrirá de seis meses á seis años de prisión, obras públicas ó presidio. Igual pena se aplicará al quo con los mismos fines oculte ó sustituya del poder de otro los títulos ó documentos con que se acredite el dominio, servidumbre, usufructo, posesión ó contrato de arrendamiento, depósito ó cualquier otro título de posesión, dominio, derechos ó acciones.

Art. 63. Los reos de hurtio y de robo no se eximen por la pena corporal de la obligación de restituir la cosa hurtada ó robada, y de resarcir los daños y perjuicios quo hubieren causado, considerando los jueces de quo esto se verifiquó con arreglo á lo dispuesto en este decreto, para el caso que carezca el reo de recursos con que hacerlo inmediatamente.

Art. 64. En los casos de robo y de hurtio se tendrá como circunstancia atenuante, la devolu-

cion de la cosa robada ó hurtada, conforme á las bases siguientes:

I. Si la devolución fuere total, y el roo no reciera la pena de muerte, se lo condenará á la mayor extraordinaria.

II. En caso de igual devolución, y de quo el reo merezca pena temporal, se lo rebajará la mitad.

III. Si la devolución fuere parcial, el juez la tomará en cuenta según las circunstancias.

Art. 65. Todo reo de hurtio ó robo después de sufrir la pena corporal, quedará sujeto á la vigilancia de las autoridades por un tiempo igual á la mitad de su condena.

Art. 66. Se eximirá de pena al reo de hurtio ó robo, siempre quo se probare haber concurrido cumplidamente las circunstancias siguientes:

I. Haberse hallado en absoluta carencia de lo necesario para vivir él y su familia.

II. Haber agotado todos los medios de adquirir honestamente con que cubrir su necesidad.

III. Haber limitado el hurtio ó robo á solo lo indispensable para ocurrir á la necesidad de ese día.

IV. No haber causado herida, lesión ni enfermedad grave á la persona robada.

V. No haber hurtado ó robado cosas de uso público ó pertenecientes á algun culto.

VI. Ser de buena vida y reputación.

Art. 67. Los casos de homicidio, horrores, robo y hurtio no comprendidos en esta ley, se juzgarán con arreglo al derecho vigente.

CAPITULO VI.

DE LOS PROCEDIMIENTOS.

Art. 68. En todas las causas de delitos comunes, quo se sigan de oficio, el procedimiento judicial se sujetará á las reglas siguientes:

I. Habiendo un dato enalquiera de quo se ha cometido un delito, y de quo alguna persona haya participado en el hecho, como autor, cómplice ó enobridor, se le mandará poner detención e incomunicada por orden escrita de enalquiera autoridad. Al delincuente infraganti y al prófugo, enalquiera persona puede aprehenderlos, para ponerlos á disposición de la autoridad.

II. Tan luego como el juez de primera instancia, conciliador ó auxiliar tuviere noticia de quo se ha cometido, se cometa ó intente cometer uno de estos delitos, se trasladará al lugar donde tal cosa ocurra; calmará el desorden que note, hará quo los presuntos reos se aprehendan, y podrá dotarlos á los quo hayan presenciado el hecho por solo el tiempo necesario para que produzcan sus declaraciones, avisándoles todo perjuicio quo no sea absolutamente indispensable. Hará llamar inmediatamente, si no los llevará ya consigo, á los peritos que el caso requiera, para quo practiquen desde luego la correspondiente inspección, y manifiesten su juicio acerca de los puntos sobre quo se los pide. El funcionario público encargado de estos actos podrá compelir con insultos quo no bajando cierto peso, ni oscuda de veinticinco, á los testigos y peritos quo se negaren á verificar los actos quo quedan mencionados; sin perjuicio de ser tratados como enobridores, por el juez de acuerdo con las reglas establecidas en el Código de Procedimientos Civiles.

III. Determinará quo se presten los primeros sonorros á los heridos, si los hubiere, y les tomará su declaración en el momento quo puedan rendirla á juicio de los facultativos; limitando, para el caso que carezca el reo de recursos con que hacerlo inmediatamente.

IV. Recogerá los efectos ó instrumentos que

hayan concienciones al delito, examinará las cosas que haya dejado, y levantará inmediatamente una acta en quo haga constar cuanto hubiere visto, presentando y prevenido.

V. No es necesario quo actuá con escribano, bastando quo se acompañe con dos testigos de asistencia.

VI. Examinará inmediatamente á los ofendidos, á los testigos y peritos, mostrándoles los efectos e instrumentos del delito para quo los reconozcan.

Lo prevenido en las reglas precedentes, no quita á los jueces de primera instancia la libertad quo tienen para ejercer todas las atribuciones de su empleo.

VII. El notificar solo practicará las diligencias del momento en los casos urgentísimos, dando cuenta inmediatamente al conciliador para quo las prosiga.

VIII. El conciliador, sin perjuicio de seguir la avocación, informará al juez de primera instancia luego quo empieza á formar una sumaria, para quo esto lo indique las demás diligencias quo debe practicar.

IX. La declaración de en la presente reo se tomará dentro de veinticinco horas despues de su aprehension, exhortándole á decir verdad, y á las encarceladas ó libres se enviarán las actuaciones al juez de primera instancia. En casos extraordinarios en quo no puedan enviarse las actuaciones dentro del plazo señalado, se hará constar el motivo de la demora.

X. Toda persona de enalquiera clase, fuero y condición quo sea, está obligada á comparecer como testigo ante la autoridad quo lo cite, sin necesidad de licencia de sus goles ó superiores. Si lo se tomará declaración en su casa ó á los enfermos quo no puedan salir de ella y á las mujeres en su delicadeza se lastime, en concepto del juez, por comparecer al juzgado. Todo testigo se ratificará inmediatamente, llamándole al reo para solo el efecto de quo lo conozca, practicando su protesta de decir verdad y digno si tiene tacha quo posarla. Cuando el reo estuviere ausente ó prófugo, esas diligencias se practicarán la noche quo sea reducido á prisión.

Cuando los testigos estuvieren ausentes, ó no se pudiere saber donde se hallan, se suplirá su ratificación, dando á los reos noticia de su nombre, señas y demás permisores, y preguntándoles por su conocimiento y tacha; y en el caso de quo tengan algunas quo oponenles, se practicarán conforme á derecho las diligencias consiguientes. Si resultaren discordantes algunas declaraciones, inmediatamente se practicará el juicio entre sus autores.

XI. El juez de primera instancia, examinando luego las diligencias y practicando las quo le parezcan más propias para formar juicio en cuanto á los indicios para la formal prisión, dentro de veinticinco horas de recibido el proceso, la deseará cuando proceda, ó dictará el auto quo corresponda conforme á derecho, notificándolo luego á los interesados y al alcaldíe, si quien dará copia autorizada.

XII. Siempre quo el delito no tenga señalada precisamente pena corporal, se admisirá fianza por el juez, desde el principio del proceso. Lo mismo cuando al concluir el plazo para dictar la formal prisión, no hubiere los datos necesarios para ello.

XIII. Las fianzas serán por cantidad determinada atendida la naturaleza del delito y la condición del delincuente.

XIV. Los jueces y tribunales dictarán de oficio las providencias preventorias quo aseguren la responsabilidad civil; fijarán su monto y determinarán quienes estaban presentes, y la causa del suceso.

PERIODICO OFICIAL

pudiore; y cuando no hubiere de satisfacer con cantidad ó parteles, proveerá lo contenido para que no quede hurtada su disposicion.

XV. Para agitar esto incidente, no es necesario que los interesados presenten escritos, basta que doce palabras espongan lo que se dice, haciendo constar en la causa.

Art. 69. Todo médico, cirujano ó práctico que sin orden del juez huela á reconocer algún cadáver de muerte violenta, ó á curar á un herido ó enfermado, está obligado á dar parte inmediatamente á la autoridad judicial del lugar, bajo la pena de cinco á cien pesos de multa, si el perjuicio de ser considerado como cómplice en el delito, si la omisión fuere criminosa.

Art. 70. En caso de homicidio ó heridas, los peritos deberán ser dos médicos que darán separadamente su informe y clasificación. Si de pronto no los hubiere, por lo menos un práctico dará la descripción detallada y la clasificación respectiva.

Art. 71. A los seis días de hecho este reocnoimiento practicarán otro á fin de ratificar ó rectificar su opinión, la que declararán ante el juez en la forma que los demás testigos, y si la opinión tiene que darse por médicos de otro lugar, se solicitará por medio de exhorto con insinuación de las descripciones que hayan hecho el práctico ó prácticos por primera y segunda vez, los que expresarán además todos los datos que puedan ilustrar á los facultativos.

Art. 72. Al sanar el herido, los médicos o pedirán el certificado de alta expresando si ha quedado algún defecto, rincón ó deformidad, a consecuencia de la herida, y en todo caso el juez dará fó.

Art. 73. Si hubiere endolor, se practicará la diligencia de autopsia, habiendo facultativo que la haga.

Art. 74. Las declaraciones de los testigos se presentarán con claridad, en diligencia separada y sin hacer referencia á otros.

Art. 75. En las causas de delito grave, declinada la formal prisión, se asentará la sanción del reo.

Art. 76. La incomunicación del reo cesará al prudendo arbitrio del juez.

Art. 77. Se terminarán en partida, las causas por delitos que, con arreglo á las leyes, no merezcan pena mayor que las de seis meses de prisión si obras públicas, ó multa de doscientos pesos. En estos casos, al citar al reo para sanción, se consignará en la partida todo lo que tenga que alegar en su defensa si quisiera usar de este derecho, y notificado el fallo, se remitirá al tribunal superior para su confirmación, revocación ó amisión.

Art. 78. El sumario termina con la confesión y los cargos, después de los cuales, si el reo está confeso y no alega excepciones que necesiten prueba, ya porque consten suficientemente en el proceso, ya por ser solamente de derecho, el juez podrá inmediatamente cortar la causa, eufegándose desde luego al defensor por un término que no exceda de tres días, para que conteste el cargo. Si el reo ó la parte agraviada se opusieren á esta determinación, el juez, sin más diligencia, abrirá el plenario.

Art. 79. Si no hubiere parte que pida, se entregará la causa al defensor por tres días, para que promueva lo que convenga al reo. Habiendo parte que pretenda fundar la acusación, recibirá desde luego el proceso por igual término. Por cada día de demora, no justificada, en devolver la causa, se impondrá á la parte actora, ó al procurador que firmó el conocimiento por el reo, una multa de uno á cinco pesos, aplicable al fondo de caídes.

Art. 80. El término de prueba, comun á ambas partes, será el de seis días, prorrogable por otros seis, en consideración de motivos graves, que se hagan constar. El juez puede conceder nueva prórroga hasta por nueve días, bajo su responsabilidad, en casos extraordinarios.

Art. 81. Concluido el término de prueba éste, el juez mandará entregar la causa al acusador, si lo hubiere, por seis días, y en segunda el defensor del reo por igual término, recogiéndola al veintimil, con sus alegatos, y exigiendo por cada día de demora la multa de que habla el art. 79.

Art. 82. El defensor debe ser nombrado por el reo conocida la confesión con cargos. Si no lo triviere, el juez se lo nombrará de oficio. Si no hubiere Abogado de pobres, la defensa se encargará por turno riguroso á uno de los abogados particulares, sin admisión de excusa que no justifique su demora.

Art. 83. Cokudo no sea posible hallar quien defienda al reo, se preguntará á este si tiene algunas diligencias que promover, las que practicará el juez y haciendo constar saber, se volverá á preguntar si tiene algo que alegar y asentará cuanto esponga. Al menor siempre se le dará de fó.

Art. 84. Producida la defensa, el juez, por su oficio, citará para sentencia, y notificado, la pronunciará dentro de ocho días.

Art. 85. Se dejará copia de la sentencia en el libro que con este objeto debe tener todo juez; se leerá original al reo, á su defensor y á la parte interesada; si este no pudiere comprender dentro de veintimil horas, se lo hará saber por medio de instrucción y se remitirá la causa sin demora al tribunal superior expresándose en ella lo que el reo y su defensor hayan contestado, y sin exhibir el grado en caso de apelación.—(Continuará)

CACETILLA.

TIANGUISTENGO.

En ese pueblo del Distrito de Zinacantan se ha alterado el orden público, el 26 del próximo pasado. Una banda de cosa de diez hombres armados parece que atacaba á alguien, en una de las casas que hacen frente á la de D. M. Manuela Soliz, pues al pasar por la calle D. Tomás Olivares, D. Isidoro Labastida y Jesus Soliz, dispararon sobre ellos, quedando muerto en el acto Olivares, y mal herido Soliz; Labastida salió ileso.

La única comunicación oficial que el gobernador ha recibido no da todavía permisos, pero confirma el acontecimiento; y las cartas particulares dicen lo mismo, aunque alterado el orden de esas noticias y expresan mayores desgracias en que no están contestes, mas que en que Jesus Soliz murió al fin de sus horillas.

El gobierno, en el noto que supo tan tristes noticias, dictó muy serias disposiciones, y aun mandó fuerzas que las apoye y preste el que se requiera para que el ciudadano gese político establezca la seguridad, las garantías y la paz pública.

Se espera el parte detallado de todo, y solo agreguemos, que el motín no tenía ninguna simpatía política y que solo era el resultado de anteriores enemistades personales entre algunos particulares, que tenían dividida la población de Tianguistengo.

A la hora en que escribimos estas líneas nos informan, que cartas particulares venidas por el último correo, hacen sentir la oísa de victimas á cuatro mes y seis otras; y si no es la muerte de Olivares y Soliz que señalamos al principio, las demás necesitan confirmación.

De todo instruiremos á nuestros lectores.

VIOLACION DE DOMICILIO.

Con el título que encabezamos este párrafo, traé el Ferrocarril otro, en que refiriéndose al *Trait d'Union*, dice que "el C. Miguel Varela ha sido destituido ilegalmente del cargo de presidente de la sociedad Filarmónica de Pachuca, por no haber querido prestar un piano al gobernador para una función teatral."

No nos molestaremos en referir el hecho tal como ha pasado, ni en calificar los motivos que decidieron á la autoridad gubernativa de este distrito á determinar la extracción del piano á que el Ferrocarril se resistió, porque ya nuestros lectores conocen el negocio, por los artículos que se han publicado, y porque la decisión de este negocio se ha sometido al poder judicial; pero sí diremos que no es cierto que el gobierno tomara parte directa ni indirectamente, ni menos dictara providencia alguna sobre el particular. Todo lo que pasa sobre estos incidentes fué entre el ciudadano gese político y el presidente y algunos de los miembros de la sociedad filarmónica de esta ciudad.

Se vé por esto, que en nada se ha metido el gobierno. El Sr. Tagle se ha encerrado en el ejercicio de sus deberes, respetarse á sí mismo y á los demás, y no son sino gratuitas las especies que nuestro colega el Ferrocarril tomó de otros periódicos para censurar procedimientos que otros han ejercido, y sobre los cuales va á robar el fallo de los tribunales, que en todo caso será inexorable si los actos del acusado no se han sujetado á las leyes.

Solicitamos á nuestros apreciables colegas del Ferrocarril, que en prueba de imparcialidad reproluzean estas líneas.

Editor responsable,

MARCELINO GARCIA.

AVISOS.

OFICIO PUBLICO DEL FISCAL MARCELINO GARCIA.

TULANCINGO.

El juzgado de 1^a instancia de este distrito, con fecha 21 del actual ha decretado en estado de quiebra á D. Cristóbal Soto, desde el dia 15 de Junio próximo pasado, y ha nombrado síndico defensor de la quiebra al ciudadano Lic. Mariano Rodríguez Vazquez, y síndico administrador al ciudadano Aurelio Meneses, provisoriamente se cita á los acreedores del fallido para que comparezcan ante el juzgado la mañana del dia cuatro de Octubre próximo y tenga efecto la junta general, y que se publique esta determinación por el "Períodico Oficial" del Estado y el "Siglo XIX."

Y en cumplimiento de lo mandado para que surte sus efectos legales se pone la presente en Tulancingo á 24 de Setiembre de 1869.—José M. Garcia.—Pachuca.

BUEN NEGOCIO.

Se traslada en esta ciudad la tienda que lleva el nombre de la AMERICA, situada en la esquina del callejón de Mora y calle de Aldama, muy inmediata á la Plaza del Mercado, con los ramos de abarrotes, vinatería y empeño; sus existencias todas nuevas, sus rentas muy buenas, y la casa con mucho fondo; la persona que se interese á ella, puede informarse en la misma casa con el que está al frente de ella, ó en México en la tienda esquina del Puente de Santo Domingo y calle de la Amargura, con D. José María Vazquez.

Pachuca, Agosto 1869.—José María Hernández Zapala.

JUZGADO DE 1.^a INSTANCIA DEL PARTIDO DE TULA.

En el expediente que se instruye en base de mi cargo, sobre el intento á bienes de los que quedaron por muerte de D. María López, vecina que falleció en Atitalaquia, por auto de 31 de Agosto último, he mandado entre otras cosas, se convogue por medio del "Períodico Oficial," que se publica en la capital de Estado, á todas las personas que como herederos ó accionistas se crean con derecho á los referidos bienes, para que en el término de treinta días contados desde la primera publicación de aviso, se presenten á deducirlo; bajo el apercibimiento de que si no lo verifican, los parará el perjuicio que hubiere lugar.

Lo que se hace saber al público para que surta sus efectos. Tula, Setiembre 13 de 1869.—Lds. Gregorio Noriega—R. P. y Campillo.—A. J. Chávez Nata.

JUZGADO 1.^a DE 1.^a INSTANCIA DEL DISTRITO DE PAHUCA.

En los autos que sigue al C. Juan Vicente Martínez en este juzgado, en contra del C. Ignacio González sobre pena de no de diez días, ha mandado se reciba este negocio á prueba por el término de diez días, haciéndole saber á las partes y publicándose esta determinación en los periódicos *Monitor* y *Diario Oficial* para conocimiento del demandado, para quien corre el término desde la fecha de la primera publicación del aviso.

Pachuca, Setiembre 22 de 1869.—Sánchez.—A.—L. Serrato—A.—G. Ariza.

NOTICIA

DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE CORREOS EN ESTA ADMINISTRACION PRINCIPAL, PARA LOS DISTRITOS DEL ESTADO Y SUS PLAZAS IMPORTANTES.

ENTRADAS.

Lunes.

Actopan, Ixmiquilpan, Tula, Huichapan, Zimapán, Jacala, Tulancingo, Huasca, Omiltem, Mineral del Monte, Apan, Zempoala, Mineral del Chico.

Martes.

Huejutla, Zinacantan, Metztitlan, Metzquitilán, Atotonilco el Grande, Omiltem, Mineral del Monte, Zempoala, Apan.

Miercoles.

Apan, Tulancingo, Huasca, Omiltem, Mineral del Monte, Zempoala.

Jueves.

Apan, Zempoala, Tizayuca, Mineral del Monte.

Viernes.

Actopan, Ixmiquilpan, Tula, Huichapan, Zimapán, Jacala, Tulancingo, Apan, Huejutla, Zinacantan, Metztitlan, Metzquitilán, Atotonilco el Grande, Tulancingo, Huasca, Omiltem, Mineral del Monte, Mineral del Chico, Zinpolde.

Sábado.

Apan, Zempoala, Mineral del Monte.

SALIDAS.

Lunes.

Actopan, Ixmiquilpan, Tula, Huichapan, Zimapán, Jacala, Apan, Zempoala, Mineral del Chico.

Martes.

Huejutla, Zinacantan, Metztitlan, Metzquitilán, Atotonilco el Grande, Tulancingo, Huasca, Omiltem, Mineral del Monte, Zempoala, Apan.

Miercoles.

Apan, Zempoala, Tulancingo, Huasca, Omiltem, Mineral del Monte, Tizayuca.

Jueves.

Apan, Zempoala, Tulancingo, Huasca, Omiltem, Mineral del Monte, Tizayuca.

Viernes.

Actopan, Ixmiquilpan, Tula, Huichapan, Zimapán, Jacala, Apan, Zempoala, Mineral del Chico.

Sábado.

Huejutla, Zinacantan, Metztitlan, Metzquitilán, Atotonilco el Grande, Tulancingo, Apan, Zempoala, Huasca, Omiltem, Mineral del Monte.

NOTAS.—1^a Los correos que condencen la correspondencia para la Huasteca y el Méjico, son despachados en los días señalados luego que llega la diligencia de Méjico.

2^a La correspondencia que se dirige para la capital de la República y demás Estados de la Federación, se despacha todos los días excepto los domingos.